

NEW LEFT REVIEW 93

SEGUNDA ÉPOCA

JULIO - AGOSTO 2015

	NUEVAS MASAS	
PABLO IGLESIAS	Entender Podemos	7
ENTREVISTA	España en la encrucijada	33
	ARTÍCULO	
MIKE DAVIS	La teoría perdida de Marx	
	NUEVOS MEDIOS	
FRANCIS MULHERN	Una fiesta de rezagados	
	ARTÍCULOS	
JOANN WYPIJEWSKI	Solo en casa	
R. TAGGART MURPHY	Sobre el Japón de Shinzo Abe	
	CRÍTICA	
JOSHUA RAHTZ	¿Flaquea el motor alemán?	
EMMA FAJGENBAUM	Tzara aproximativo	
VOLODYMYR ISHCENKO	Mitologías del movimiento Maidán	

La nueva edición de la New Left Review en español se lanza desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador-IAEN

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

© Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), 2014, para lengua española

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



traficantes de sueños

[SUSCRÍBETE](#)

SOBRE EL JAPÓN DE SHINZO ABE

Historia y legitimidad en Asia Oriental

EL 14 DE diciembre de 2014, el Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro japonés Shinzo Abe obtuvo lo que pareció ser una contundente victoria en las elecciones a la Cámara Baja por segunda vez en dos años. Pero si las miramos con más detenimiento, nos daremos cuenta de que estas «victorias» fueron bastante particulares. El PLD no pudo asegurar ni tan siquiera el 20 por 100 de los votos del electorado de Japón en ninguna de las dos elecciones. De hecho, el partido contaba con un apoyo más alto en 2009, cuando perdió el control de la Cámara Baja y fue obligado a cederle las riendas del gobierno a la oposición representada por el Partido Democrático de Japón (PDJ). Aquella fue la única vez que los votantes interrumpieron la así llamada democracia unipartidista de Japón, conocida localmente como el sistema de 1955, año en que se fundó el PLD. (Es cierto que el PLD también pasó un breve periodo en la oposición en 1993, por culpa de deserciones de diputados de sus propias filas). La vuelta al poder del PLD en 2012, con un apoyo del electorado menor que el que le costó el gobierno la última vez, se suele explicar en Tokio por un boicot por parte de antiguos apoyos dentro del PDJ, cuya abstención se repitió en diciembre pasado.

El PDJ había sido llevado al gobierno en 2009 con la esperanza de millones de votantes japoneses puesta en un cambio político real, pero el colapso en 2010 del primer gobierno del partido, bajo la dirección del primer ministro Yukio Hatoyama, demostró lo vana que había sido aquella esperanza. Hatoyama fue saboteado por sectores de la burocracia, así como por una campaña concertada por importantes medios de prensa. Estos ataques acosan a todos los políticos con ambiciones reformistas en Japón, y son tan previsibles como las moscas zumbantes en torno a los animales de granja en los días de calor. Pero en el caso de

Hatoyama, los burócratas y expertos que lo derribaron contaron con el apoyo crucial del *establishment* de la política exterior estadounidense, alarmada por la promesa del PDJ de revisar la política de seguridad y de defensa de Japón, así como sus relaciones exteriores.

Desde el fin de la ocupación estadounidense en 1951, Japón ha funcionado de hecho como un protectorado norteamericano, más que como un aliado. El Tratado de Seguridad que los dos países firmaron en 1951, enmendado en 1960, es realmente un acuerdo de arrendamiento de territorio, que permite al Pentágono mantener una gran red de bases militares por todo Japón, sostenidas en gran parte con los impuestos del ciudadano japonés. Por razones prácticas, Washington ha venido disfrutando de un poder de veto en las políticas de exterior y defensa de Japón. Los líderes del PDJ habían hablado de reducir la presencia militar estadounidense y de negociar con vistas a mejorar las relaciones con Pekín. Los portavoces de Japón en Estados Unidos –el PLD milita casi como un solo hombre– emplearon este tipo de lenguaje para convencer a Washington de que el PDJ era antiestadounidense y amenazaba el statu quo en la región. Los funcionarios encargados de los asuntos de Japón en el Departamento de Estado de Hillary Clinton, la mayoría de los cuales estaban formados en el Pentágono, se inquietaron por los efectos que todo esto podría tener ante el tan anunciado «giro» asiático de Estados Unidos, y la Casa Blanca se alineó con la oposición del PLD. El gobierno de Obama procedió a negociar con Hatoyama de una forma tan insultante que, de haberse dirigido al líder de casi cualquier otro país, millones de personas habrían salido a la calle a manifestarse contra Estados Unidos. En Japón, por el contrario, este trato displicente de un gobierno en ejercicio le dio al PLD y a sus portavoces mediáticos en Tokio la munición que necesitaban para demostrar que el PDJ estaba dañando la relación exterior más importante de Japón¹.

Los dos sucesores de Hatoyama en el PDJ, temerosos de sufrir un similar destino, se mantuvieron alejados de cualquier iniciativa controvertida en política exterior, produciéndose un cisma en el partido reformista que terminó siendo irreparable. Su último primer ministro, el tecnócrata Yoshihiko Noda, traicionó a su partido al convocar unas elecciones anticipadas en 2012 para tratar de salvar el sueño del Ministerio de Finanzas de subir los impuestos. Desprovisto de toda credibilidad, el

¹ Todo esto está descrito en Gavan McCormack, «Obama vs. Okinawa», *NLR* 64, julio-agosto de 2010.

PDJ fue castigado con el boicot por parte de millones de sus antiguos votantes. Ese boicot, unido al peso desproporcionado que tienen las circunscripciones más conservadoras y rurales en el sistema electoral japonés –un sistema único de escrutinio mayoritario uninominal para los candidatos, pero de voto proporcional para los partidos–, se tradujo en que el PLD, con un apoyo popular de menos del 20 por 100 del electorado, lograra hacerse con mayorías en la Cámara Baja. Su líder, Abe, había ejercido anteriormente como primer ministro en una ocasión, al tomar el relevo de Junichiro Koizumi, aficionado al *show-business*, en 2006. Abe pensó que durante los años de Koizumi la economía japonesa ya se había liberalizado lo suficiente como para permitirle a él centrarse en lo que realmente le importaba: su largo tiempo ansiada agenda derechista, consistente en echar abajo los acuerdos de posguerra de Japón, con sus supuestamente foráneas nociones de democracia y gobierno constitucional. La gente saludó estos esfuerzos tempranos con un largo bostezo. Golpeado por una serie de escándalos y puesto en la picota por la prensa, que lo tildaba de falto de oído –*kuuki yomenai*, o «incapaz de leer el aire», es el término japonés–, Abe dimitió tras menos de un año en el poder.

Seis años después, a la sombra de la crisis financiera y del desastre de Fukushima, Abe parecía haber aprendido la lección de que si un gobierno da la impresión de pasividad ante los miedos económicos de la gente y sus aspiraciones, poco se puede hacer en otros ámbitos. Al tomar posesión de su cargo por segunda vez en diciembre de 2012, anunció «tres flechas» para transformar la economía japonesa. Situó a un nuevo hombre en la dirección del Banco de Japón para lanzar la primera flecha, consistente en una ráfaga de expansión masiva de la masa monetaria [*quantitative easing*], que rivalizaba con la de Ben Bernanke: unos 65 billones de yenes (350 millardos de dólares) en 2013, que llegaron hasta los 80 billones (450 millardos de dólares) en 2014. La segunda flecha consistió en una orgía de gasto público, nada menos que 10,3 billones de yenes (116 millardos de dólares); Abe podía apoyarse en un poder legislativo que haría lo que se le dijera en materia de estímulo fiscal. La tercera flecha consistió en un paquete mal definido de «reformas estructurales». Pero la falta de concreción en los detalles realmente no importaba mucho, ya que las dos primeras flechas lograron el propósito de Abe: espolear al mercado bursátil y poner el yen por los suelos. El sector empresarial japonés estaba en éxtasis, al ver cómo sus beneficios y los ingresos procedentes de sus exportaciones se inflaban con la aguda depreciación de la moneda, si bien el volumen de exportaciones,

de hecho, se incrementó poco. Los síntomas de la subida de glucosa en la economía duraron lo suficiente como para que el PLD ganara las elecciones a la Cámara Alta en julio de 2013.

Eso le dejó a Abe las manos libres para hacer lo que él mismo y la gente de su entorno realmente querían: acometer la restauración del gobierno abiertamente autoritario de los años de entreguerras. El PLD no acababa de tener la mayoría cualificada que necesitaba para echar abajo la Constitución de 1947, que gran parte del partido venía desde hacía tiempo etiquetando como un documento extranjero impuesto a Japón². Así las cosas, Abe actuó como si la máxima ley fuera papel mojado, avasallando a la Dieta a finales de 2013 con una ley flagrantemente inconstitucional para regular el tratamiento de la información confidencial, que otorgaba al gobierno el poder para etiquetar cualquier cosa que estimara oportuno como «clasificado» y para perseguir a cualquiera que osara, incluso inconscientemente, indagar en los hechos. Poco después, el 1 de julio de 2014, el gobierno anunció, a instancias de Washington y sin respaldo legislativo para ello, que Japón se acogía, de ahí en adelante, a la «legítima defensa colectiva», lo que en la práctica significaba que Tokio podría desplegar tropas para que tomaran parte en conflictos que no amenazaran al propio Japón. Como el artículo 9 de la Constitución «renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación», especifica que «no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire» y afirma que «el derecho de beligerancia no será reconocido», el anuncio del gobierno equivalía a declarar que Japón se había convertido en un Estado sin ley, gobernado por decreto.

Entretanto, Abe había situado en la cadena de televisión pública, la NHK, a numerosos cargos de extrema derecha bajo el mando del empresario conservador Katsuto Momii, y había adoptado el hábito de rendir culto en el santuario de Yasukuni, ubicado en Tokio. Este antiguo centro espiritual del culto nacionalista del Japón imperial no solo recuerda las almas de millones de víctimas japonesas de la guerra, sino que también conmemora las de criminales de guerra convictos que fueron allí consagrados en 1979 por religiosos de la derecha radical. Esta es la razón por la que las visitas oficiales a Yasukuni han provocado, desde entonces,

² Tal y como ha demostrado Takashi Tachibana, partes sustanciales de la Constitución japonesa fueron realmente extraídas de un boceto redactado por juristas liberales japoneses y por periodistas durante la década de 1920: T. Tachibana, «Watashi no goken-ron» [«Mi teoría constitucional»], *Gekkan gendai*, julio de 2007.

reacciones furiosas por parte de China y Corea del Sur, y la razón de que los emperadores de Japón hayan dejado de visitar el santuario.

Las percepciones de Washington

Los ataques de Abe a las instituciones que entorpecen su agenda derechista deben ser vistos en el contexto de los asaltos al imperio de la ley en Estados Unidos y en el del desmantelamiento en curso de la supervisión política de los órganos del sistema nacional de seguridad estadounidense. Estados Unidos, país en el que la Cuarta, la Sexta y la Octava Enmiendas a la Constitución se han convertido en letra muerta, no está precisamente bien situado para reprender a otro país por ignorar su propia ley fundamental. Como tampoco Washington –que permite que una CIA fuera de la ley meta la nariz en el mismo órgano legislativo encargado de supervisarla– debe tener especial motivo para reprender a un Tokio, que contempla el establecimiento de oficinas o unidades secretas, que no rinden cuentas ante nadie para determinar quién puede y quién no puede haber puesto en peligro la confidencialidad. Es en el país del presidente Obama, y no en el del primer ministro Abe, donde los informadores internos de los desmanes de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) han sido recompensados con sentencias de prisión draconianas y vengativas por haber sacado a la luz el crimen y la corrupción en el seno del gobierno para el que trabajaban³. Este cambio de rumbo político de Estados Unidos, que rompe amarras con las instituciones democráticamente responsables, ha ayudado a aliviar la tensión inherente que afecta a los elementos más derechistas dentro del PLD, obligados durante largo tiempo a conciliar su apoyo a la «alianza» Estados Unidos-Japón con su aversión al legado de la ocupación estadounidense y, ante todo, a su lamentable legitimación de la noción de la rendición de cuentas de los gobernantes ante los gobernados.

Washington vio con muy buenos ojos el regreso del PLD al poder en 2012 no solo porque el PLD sea en parte una creación de la CIA (la agencia envió fondos a Tokio en 1955 para financiar una fusión de partidos conservadores con el fin de prevenir una victoria electoral de la izquierda), ni porque sus lazos con los *establishments* de la defensa y la política exterior estadounidenses sean tan fuertes y antiguos, sino porque el Pentágono aboga por una máquina de guerra japonesa en Asia Oriental con más músculo y dotada además de la denominada «interoperatividad», lo que significa que los dos ejércitos funcionarían esencialmente

³ «Obama's crackdown on whistleblowers», *The Nation*, 15 de abril de 2013.

bajo un mando único. Abe mantuvo su promesa de superar los mayores obstáculos en el camino hacia esa «interoperatividad»: la Constitución japonesa y la profunda oposición en la pequeña isla de Okinawa, donde se concentra gran parte de la presencia militar estadounidense en Japón. El gobierno de Abe puso tanto dinero en Okinawa que su gobernador cambió de parecer y anunció su apoyo al proyecto de una nueva base naval estadounidense, proyecto que había sido previamente acordado entre Tokio y Washington, pero que se topaba, y se topa, con una fuerte oposición entre la mayor parte de la población local. Se ha legislado para prohibir protestas contra la nueva base y, mientras escribo esto, ya han comenzado las obras preliminares⁴.

La celebración de Washington no solo fue prematura, sino también una muestra de lo poco que se entienden allí las verdaderas dinámicas del poder en Japón. Los políticos conservadores y los intelectuales en torno a Abe culpan a los estadounidenses y a su ocupación de Japón de una supuesta relajación en su país, que habría socavado la fibra moral que ellos consideran esencial ante cualquier futura confrontación con la nueva superpotencia beligerante en el continente asiático. Por poco que sea su afecto real hacia Estados Unidos, no pueden concebir, a día de hoy, ninguna alternativa a la «alianza» entre los dos países, si de lo que se trata es de evitar la sumisión al intento de Pekín de ganar de nuevo la hegemonía regional de la que China disfrutó durante las eras dinásticas. En la medida en que Washington también considera –como ha quedado puesto de manifiesto– que un orden político genuinamente democrático en Japón supone un problema para el *imperium* estadounidense en la región, los conservadores japoneses aceptan por el momento, e incluso ven con buenos ojos, la subordinación de su país al Estado de seguridad nacional estadounidense. Para la derecha japonesa esta subordinación es aceptable, ya que sabe por experiencia que siempre puede contar con el apoyo de Washington a la hora de lidiar con cualquier desafío que se le presente, por la simple vía de vestir el problema como una amenaza para los planes del Pentágono para Asia Oriental (una habilidad que ha vuelto a demostrar hace poco, colocando con éxito la etiqueta de «antiestadounidense» al PDJ).

Pero las agendas del Washington oficial y de la derecha japonesa no son las mismas. El Estado de seguridad nacional norteamericano ve Japón

⁴ No está claro que se terminen alguna vez, entre otras cosas, porque mientras tanto ha sido elegido un nuevo gobernador opuesto a la base.

como un vasallo más –aunque importante–, del que espera que haga lo que se le diga y no cree problemas. El Pentágono y la derecha japonesa podrán compartir pareceres similares en cuanto a la necesidad de «contener» a China y la inevitabilidad en última instancia de la confrontación con ella, por medios pacíficos o no, pero Washington no está dispuesto a permitir a Tokio elegir el momento y la naturaleza de esa confrontación. Es más, Washington pretende que Tokio mantenga buenas relaciones con Seúl, de forma que ambos puedan jugar los respectivos papeles que el Pentágono ha escrito para ellos, en su plan de afrontar el impredecible problema de Corea del Norte combinado con una política de «contrapeso» y contención ante el ascenso de China. Aunque comparta los demás puntos de la agenda, la derecha japonesa no está dispuesta a llevarse bien con Seúl si es al precio de renunciar a su antiguo y querido propósito de reescribir la historia de la década de 1930, y de librar a Japón de las instituciones «extranjeras» y de las ideas «impuestas» a su país por la Ocupación.

Las sombras de la historia

Quizá no haya nada que deje tan perplejo a Washington como la persistente obsesión en Tokio, Seúl y Pekín con acontecimientos ocurridos tan atrás en el tiempo que casi nadie de entre los vivos conserva algún recuerdo de ellos. Y, sin embargo, la legitimidad política interna de los tres gobiernos parte directamente de sus respectivas interpretaciones de aquellos acontecimientos, interpretaciones que no pueden, en ningún escenario concebible, ser reconciliadas. En Pekín, la transformación de un autoproclamado régimen revolucionario de trabajadores y campesinos en un mandarinato burocrático confucionista ha obligado a construir nuevas fuentes de legitimidad más allá de la teoría marxista-leninista. El Partido Comunista Chino ha reemplazado de hecho esta última por los ideales confucionistas de un mandarinato benévolo en el centro de una sociedad bien ordenada. Así, los relatos sobre la lucha de clases, la Larga Marcha y la guerra contra el Kuomintang de Chiang Kai-shek han perdido en gran parte su sitio entre los mitos fundacionales promovidos por el PCCh, que prefiere vanagloriarse de su capacidad de generar crecimiento económico y de su supuesta gesta histórica fundamental de haber expulsado a los japoneses de China (por mucho que, en realidad, el peso de aquella lucha contra los japoneses recayera sobre el Kuomintang). Entre otras cosas, el PCCh espera que al poner de relieve el papel de todos los chinos patrióticos en las luchas contra Japón, en

lugar de insistir en la guerra civil china, eventualmente se podría llegar a algún tipo de acomodo formal entre el continente y Taiwán que le pareciera aceptable al Kuomintang (que sigue siendo el partido mayoritario en la isla), cuando no a la población taiwanesa en general. Pero todas estas poses antijaponesas le ponen difícil a Pekín hacer negocios directamente con Tokio, en particular cuando este se encuentra ahora bajo el control de los descendientes directos –genéticamente y no solo– de aquellos que violaron y saquearon a su paso por China.

Mientras tanto, aunque Corea del Sur pueda ser uno de los mejores ejemplos mundiales de éxito económico, el régimen está plagado, desde su mismo origen, de problemas de legitimidad. Se piense lo que se piense del triste récord de Corea del Norte en términos de opresión y brutalidad, las credenciales de su fundador, Kim Il Sung, en tanto que soldado guerrillero combatiente contra la ocupación japonesa de Corea no se ponen en duda. En contraste, Syngman Rhee, el primer presidente de Corea del Sur, fue aupado al poder por Washington y forzado al exilio en 1960 por una revuelta estudiantil. Menos de dos años después, Park Chung-hee, el padre de la actual presidenta, tomó el poder mediante un golpe de Estado. Más que ninguna otra persona, él es el responsable del milagro económico de Corea, pero su socialización y su noción de las cosas eran casi enteramente japonesas. Fue educado en la Manchuria colonial, estudió en la academia militar más importante de Japón y prestó servicio en el ejército japonés, adoptó un nombre japonés y, cuando tomó el poder, impulsó la industrialización de su país con una agenda que bien le podían haber escrito los *kakushin kanryō*, esto es, los burócratas reformistas que pusieron la economía japonesa al servicio de la guerra en la década de 1930, administraron Manchuria como una colonia modelo y, después de la guerra, constituyeron el núcleo del legendario Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI).

Esta historia restringe el margen político de que dispone la hija de Park, hoy al frente del país, a la hora de buscar un acomodo con un gobierno japonés resuelto a reescribir el relato de las décadas de 1930 y 1940. Cualquier narrativa que retrate a los coreanos de una manera que no sea la de puras y justas víctimas del brutal imperialismo japonés le resulta intolerable al actual gobierno de Seúl. No hay espacio en los círculos oficiales para una discusión matizada de la colaboración coreana con los ocupantes, ni para ningún relato exhaustivo del caso de las «mujeres de confort» (el eufemismo con que se alude a las miles de jóvenes mujeres coreanas

reclutadas por el ejército japonés para ejercer de esclavas sexuales). Es cierto que los japoneses llevaron la sistematización de la esclavitud sexual en Corea y en otros lugares a niveles sin precedentes, pero la historia completa de la explotación institucionalizada de las jóvenes más pobres a lo largo de Asia Oriental nos dice que estas prácticas comenzaron mucho antes de la colonización japonesa y no finalizaron con ella, por mucho que esto case mal con el mito de los malvados japoneses y los virtuosos coreanos victimizados. Quizá el aspecto más feo del colonialismo –y el más duro de asumir luego– es el colapso moral que engendra en los colonizados: las incontables (pequeñas y no tan pequeñas) traiciones a los amigos, a los vecinos, a los familiares, y en último término la pérdida del respeto por uno mismo, para poder sobrevivir. Es comprensible que la mayor parte de la gente que se ha visto sometida a opresión extranjera prefiera concebirse a sí misma como daneses, que se pusieron la estrella amarilla para solidarizarse con sus compatriotas judíos; pero el sórdido episodio de la Francia de Vichy está más cerca de lo que habitualmente ocurre. Aunque esto deje al hijo del colaboracionista con un talón de Aquiles.

Violando el tatemae

Entretanto, ¿qué decir de Abe y su entorno? ¿De dónde les viene esa obsesión por reescribir el pasado? Cualquier intento de escamotear o de borrar de la historia la masacre de Nanking, la sistemática esclavización de mujeres coreanas y otras no japonesas, el bombardeo terrorista de Chongjin, el asesinato deliberado de unos 70.000 chinos étnicos tras la caída de Singapur o los «experimentos» médicos llevados a cabo con humanos por la Unidad 731, de infausta memoria (por mencionar solo las más relevantes de entre las atrocidades cometidas por el Ejército Imperial de Japón), es simplemente una locura, no importa el medio probatorio que se emplee o el baremo de verdad objetiva que se fije. Cualquier líder japonés que adoptara una actitud realista y no sentimental hacia los intereses nacionales de su país comprendería al instante los problemas de legitimidad que afectan a sus homólogos en Pekín y Seúl; y se daría cuenta de que cualquier intento de reescribir la historia amenaza con bloquear las dos obvias sendas estratégicas que Japón tiene ante sí: bien una relación con China sobre bases nuevas, bien ejercer de contrapeso tácito del poder chino a través de alianzas con Corea del Sur y Estados Unidos.

La mayoría de los japoneses no comparten los sueños derechistas que parecen inspirar a Abe y a sus consejeros. No están demasiado enterados –si es que lo están en absoluto– de lo que realmente sucedió en la década

de 1930. Los colegios pasan de largo por aquellos hechos, mientras que un verdadero tsunami de novelas, películas y programas de televisión retrata a los japoneses de aquel tiempo –incluyendo a los soldados, líderes políticos y generales– como gente decente y sin responsabilidad ninguna que se vio atrapada en unos acontecimientos horribles. Incluso los japoneses más liberales y bienintencionados encuentran casi intolerable afrontar directamente la escala de lo que tuvo lugar entonces. Si se les fuerza a ello, terminan cayendo en la idea vaga de que eso es lo que la guerra inevitablemente trae consigo, y esa es una de las razones por las que el pacifismo está tan hondamente arraigado en Japón.

Lo que irrita particularmente al japonés corriente es la sensación de que el pasado está siendo utilizado selectivamente a modo de porra para golpearlos. Ven las bombas nucleares que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki o el bombardeo incendiario de Tokio por la US Army Air Force de Curtis LeMay como atrocidades de no menor calibre que cualquier acto que hubiera podido cometer el Ejército Imperial, y no les falta razón en ello. Pero Washington, con toda su arrogancia y condescendencia hacia Tokio, normalmente evita restregarle los hechos de aquella época en la cara. No así Seúl o Pekín. Un PCCh que ha gobernado sobre el hambre de las masas y con un vasto sistema de «cárceles negras», y que está determinado a culminar una empresa de devastación cultural para subyugar las tierras del Tíbet y de los uigures en el noroeste de China, tiene, a ojos de los japoneses, poca autoridad moral para decir nada sobre la conducta de Japón durante la guerra. Mientras, a muchos en Tokio se les atraganta la insistencia interminable de Seúl en el tema de las «mujeres de confort». Pues todo varón japonés de una cierta edad sabe lo que es una casa *kisaeng*; en las primeras décadas de posguerra, entre los hombres japoneses Corea del Sur era prácticamente un término alternativo para decir paraíso turístico sexual. La infraestructura de aquel turismo no la llevaban japoneses.

Para muchos japoneses, todo esto parece ser una especie de malevolencia que flota en el aire y contra la que se sienten indefensos. Gran parte de este sentimiento parte de una extrapolación inconsciente de lo que sucede en la sociedad japonesa en el ámbito de las relaciones internacionales. En Japón, si dos partes cualesquiera –empresas, individuos, organismos públicos– están obligadas a entenderse, tácitamente adoptarán una especie de código ficticio para conducir su relación, cuyo término japonés es *tatema*. Violar el *tatema* –soltar la verdad en toda su crudeza, por así decirlo– suele interpretarse como un acto intencionadamente agresivo, y así es como la mayor

parte de los japoneses, como en un acto reflejo, tienden a ver las repetidas referencias de Pekín a la masacre de Nanking o la insistencia de Seúl en la cuestión de las «mujeres de confort». Si estos gobiernos realmente tuvieran buenas intenciones hacia Tokio, no tendrían inconveniente en envolver toda la discusión sobre los nubarrones del pasado en eufemismos acerca de las desdichas de la historia y aludirían a la necesidad de construir marcos de amistad para prevenir que se repitan.

Pero ni Seúl ni Pekín están dispuestos a entrar en ese tipo de baile, y ciertamente no con un gobierno en Tokio que se antoja como un descendiente directo del régimen que llevó la guerra a sus países e infligió sufrimientos indecibles a sus ancestros. El hecho de que el PCCh nunca habría logrado el poder si el Ejército Imperial japonés no hubiera antes dejado casi neutralizado al ejército de Chiang Kai-shek; y que el régimen surcoreano, perseguido desde su concepción por la sombra de la colaboración, haya tenido que mantener un conflicto de sesenta años con sus conciudadanos coreanos de Pyongyang, proclamándose a sí mismo como el de los verdaderos patriotas coreanos, hacen que a Seúl o a Pekín les resulte aun más difícil ignorar lo que Abe y su entorno se han propuesto hacer.

Los guardianes del kokutai

A diferencia de la gran mayoría de los japoneses, Abe y sus consejeros tienen una comprensión aguda, si bien estrecha, del pasado, que raya en la obsesión. Esa obsesión se retrotrae a las raíces del Estado japonés moderno, la llamada Restauración Meiji de 1868, que fue en realidad un golpe de Estado perpetrado por samuráis provinciales de bajo rango provenientes del oeste de Japón. Consternados ante la erosión de los privilegios de los samuráis y el estado de confusión y debilidad, producto de la evidente decadencia, en que se encontraba por entonces inmerso el shogunato de Tokugawa y ante las exigencias perentorias formuladas por los imperialistas occidentales, involucraron su toma del poder en nociones legitimadoras de dos signos distintos y mutuamente contradictorios: gobierno directo del emperador, por un lado, y nociones de un gobierno constitucional de influencia occidental, por el otro. Procedieron a llevar a su país a marchas forzadas por la senda de las potencias industriales, con tanto éxito que, en la guerra ruso-japonesa de 1905, derrotaron a un Estado europeo, lo que persuadió a los occidentales de que debían tratar a los japoneses más o menos como a iguales. Por supuesto, estos éxitos fortalecieron su legitimidad.

Con todo, siguió habiendo un desfase no superado entre la ficción del poder imperial y la realidad de un gobierno de oligarcas autodesignados, y ese desfase preparó el terreno para un siglo de luchas de poder. La oligarquía burocratizada que heredó el poder de los líderes meiji después de que estos fueran muriendo, en las primeras décadas del siglo XX, carecía de medios formales para resolver las disputas, ya que en teoría gobernaba en nombre de un emperador que en realidad casi nunca tomaba decisiones. El resultado de todo ello era una irresponsabilidad política colosal, que culminaría en una guerra terrestre en Asia, carente de cualquier perspectiva plausible de victoria, y en un ataque directo a una potencia de ultramar con una base industrial diez veces mayor que la de Japón.

Estados Unidos emprendió la ocupación de Japón decidido a purgar la estructura de poder de aquellos que, a ojos estadounidenses, habían sido los responsables de la guerra. Decenas de ex altos cargos fueron arrestados y arrastrados ante los tribunales de crímenes de guerra de Tokio, que pronto degeneraron en algo próximo a una farsa, ya que los estadounidenses dejaron claro que cualquier discusión sobre la implicación y la culpabilidad del emperador quedaba excluida. (Douglas MacArthur, comandante supremo de la Ocupación y obsesionado con bruñir su reputación de virrey benevolente, se había convencido a sí mismo de que el emperador debía ser protegido de cualquier exigencia de responsabilidad, y de que la alternativa sería la extensión del desorden). Enfrentado a los dilemas planteados por una izquierda japonesa renaciente, una sangría creciente en el erario público de Estados Unidos y la alarmante «pérdida» de China, donde las guerrillas de Mao Zedong estaban a punto de tomar el poder, Washington decidió cambiar el rumbo, por usar la jerga de la época, y de hecho les devolvió las llaves del poder a aquellos elementos de la elite japonesa que habían sobrevivido a las purgas inmediatas de posguerra.

El regreso al poder de las elites tenía que racionalizarse con una puesta al día de las ficciones políticas contradictorias construidas durante la Era Meiji, a saber: la ficción del gobierno parlamentario, la ficción del mandato imperial directo, y la realidad del control por parte de samuráis provinciales de bajo rango que habían tomado el poder en la década de 1860. La Constitución de la posguerra, impuesta por Estados Unidos, traspuso estos conceptos en notas que, desde luego, desentonaban menos. Entre otras cosas, gran parte de la población japonesa del periodo de posguerra quería que su país fuera realmente lo que proclamaba ser:

una democracia cuya soberanía partía del pueblo japonés. Pero mientras la mayor parte de los detentadores del poder en Japón no tenían mayor problema en utilizar esta noción para dar a su gobierno una fachada de legitimidad ante los ojos del mundo (y de todos modos la Ocupación, y los términos por los que se le puso fin, tampoco le dejaba otra opción), nunca llegaron a aceptar la base constitucional-democrática de su derecho a gobernar. A día de hoy continúan remitiéndose, sin ser explícitos al respecto, a la noción de un Japón como tierra única, sagrada y centrada en la Casa Imperial como fuente última de legitimación de su poder político; el *kokutai*, o la esencia nacional, era el término de preguerra. Esto es particularmente cierto cuando hablamos de aquellos elementos de la elite que fueron los beneficiarios directos del «cambio de rumbo» de finales de la década de 1940 y que, con apoyo de la CIA, dieron luz al PLD en 1955 para asegurar su presencia en los pilares clave de la estructura de poder japonesa: las grandes burocracias y las empresas y los bancos entrelazados entre sí. Puede que no utilicen ya mucho la palabra, pero la naturaleza mística de *kokutai* y la noción de que su preservación es la tarea fundamental de los gobernantes de Japón recalcan su creencia en su derecho a gobernar. En la medida en que su legitimidad en la estructura de preguerra emanaba directamente de sus roles autoasignados de guardianes del *kokutai*, se hizo imposible cualquier examen desapasionado de lo que había llevado a Japón al desastre, ya que ello suponía socavar la necesidad que tenían en el mundo de posguerra de hacer valer sus ambiciones de poder más allá de toda discusión.

Herederos y aspirantes

Más que ninguna otra figura en Japón, Abe personifica la continuidad de lo que ha sido la elite moderna del poder en el país desde su conformación a finales del siglo XIX. Creció en las rodillas de su abuelo Nobusuke Kishi, que no solo había sido uno de los líderes más importantes durante los años del fascismo —zar económico de la colonia japonesa modelo de Manchuria y ministro de Municiones en el gobierno de Tojo—, sino que luego emergería como el arquitecto clave del orden político de posguerra en Japón: tanto del PLD como de la «alianza» con Estados Unidos. Ya desde adolescente, Abe ha estado obsesionado con la idea de dar con una interpretación de los acontecimientos del siglo XX que limpie el nombre de su abuelo y que refuerce la noción de que la guerra le fue impuesta a Japón, de que sus líderes no tenían otra opción. El triunfo de Abe es algo más que la humillación electoral de la oposición organizada de Japón.

Representa el regreso de la idea original de su abuelo, de un PLD que sirviera para evitar de antemano la posibilidad de un desafío futuro al control de las instituciones políticas y económicas clave del país, que, después del hiato de la Ocupación, la oligarquía burocratizada de Japón acababa de retomar. La infraestructura política construida por Kishi y sus aliados logró, efectivamente, bloquear cualquier relevo izquierdista en la maquinaria parlamentaria de Japón, extremo que parecía hartamente probable en la década inmediata de posguerra. Sin embargo, los arquitectos del PLD no adoptaron medidas comparables contra la eventualidad de una insurrección dentro del propio partido. Hasta 1971, los primeros ministros del PLD –incluyendo al propio Kishi– eran en su mayor parte mandarines surgidos del interior de las grandes burocracias de Japón. Pero la maquinaria de la política electoral permitió que otros también pudieran pescar: por ejemplo, un populista proveniente de las mismas filas del PLD, que pudiera manejar con maestría los entresijos de sus equilibrios de poder. Fue lo que sucedió en 1971, cuando Kakuei Tanaka se convirtió en primer ministro.

Tanaka, un genio político bendecido por el Japón rural del interior, en cuyo nombre hablaba, tenía poco interés en las fantasías conservadoras sobre la «esencia nacional» japonesa. Su propósito era llegar a acuerdos, y tenía mucho talento para ello. Entre otras cosas, negoció el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Tokio y Pekín con Zhou En-Lai. La burocracia hizo las paces con Tanaka, que nunca desafió realmente la base del gobierno oligárquico; lo que él quería –y obtuvo– era «más» para los millones de granjeros y pequeños empresarios a lo largo y ancho de Japón, los cuales constituían su base política. La situación era tolerable para la elite del poder tradicional de Japón mientras la economía creciera, pero la desaceleración que se produjo tras la implosión de la así llamada «economía de la burbuja» a finales de la década de 1980 puso de manifiesto la división existente en el seno del PLD entre los baluartes del gobierno oligárquico y los discípulos que Tanaka había dejado tras de sí. El más capaz entre estos discípulos, Ichiro Ozawa, anunció en un libro, que fue un éxito de ventas, su intención de emplear los métodos de Tanaka para transformar a los políticos electos, que pasarían de ser siervos de una elite burocratizada a gobernantes de la misma, en el proceso de convertir Japón en lo que él llamaba un «país normal». Lideró la retirada del PLD que tuvo lugar en 1993, y que por un breve lapso de tiempo llevó al partido a la oposición. Tras este primer intento fallido de construir una alternativa al gobierno de la burocracia-PLD, que llevaba al mando

del país desde 1955, Ozawa decidió aliarse con los fundadores del PDJ. Sus brillantes dotes de político taticista llevaron directamente a la victoria del PDJ en 2009.

Aquellas elecciones aterrorizaron a la elite del poder tradicional en Japón. No se trataba solo de la derrota del PLD. Porque en las nociones de Ozawa sobre la competición política y la rendición de cuentas de los gobernantes ante sus votantes latía implícito el embridamiento democrático de las burocracias formales e informales que llevaban gobernando Japón desde que los líderes meiji empezaron a morir. Este hecho explica por sí mismo la determinación de la elite del poder en Japón a la hora de asegurar que nada parecido a lo que sucedió en 2009 pueda volver a pasar. Eso significa algo más que la mera neutralización de la oposición existente. El ejemplo de Tanaka y Ozawa demuestra que, mientras la infraestructura de la política electoral ofrezca la posibilidad de que políticos ambiciosos tomen de hecho las riendas del poder, dicha infraestructura constituye una amenaza a la continuidad del control por parte de los oligarcas burocráticos de Japón. No se puede tolerar, por lo tanto, que la base de su legitimidad resida en los votos y en las elecciones; antes bien, se trata del derecho a gobernar por parte de un mandarinato sabio que se perpetúa a sí mismo. Es en este punto donde podemos situar la compulsión para reescribir la historia: en la necesidad de poner el derecho a gobernar a salvo de cualquier desafío.

Pekín y Tokio, por lo tanto, terminan convergiendo en la misma definición histórica confucionista del orden político justo: el gobierno de una elite benevolente cuya supuesta legitimidad descansa en su superior educación, perspicacia y moral. Después de flirtear con modelos de legitimidad importados de Occidente (respectivamente, el rol de vanguardia otorgado a marxistas adecuadamente socializados, y la victoria en elecciones libres y justas), ambos países están regresando a arquetipos históricos. Pero tal cosa no propicia en absoluto el acomodo entre ellos, ya que, como hemos visto, los mitos fundadores de los dos mandarinatos no pueden conciliarse.

Mito y error de cálculo

¿Dónde nos lleva todo esto? China no ve a Japón como una entidad política independiente, sino como un representante de Washington y de las intenciones estadounidenses de impedir la restauración de lo que Pekín

considera el justo estado de las cosas, a saber: un orden en Asia Oriental benevolente, centrado en China. Ni Washington ni Tokio han hecho nada para disipar las sospechas de Pekín sobre quién es realmente su interlocutor cuando negocia con Tokio. Las repentinas pretensiones por parte de Pekín sobre pequeños grupos de islotes en aguas entre los dos países se suele describir como parte de una ofensiva más amplia para restaurar la hegemonía histórica de China en el este y sudeste asiáticos. Pero conviene recordar que las provocaciones chinas solo comenzaron tras la destrucción del primer gobierno del PDJ, en la que Washington jugó un papel tan crucial. Aquel gobierno había enviado a China a unas seiscientas personalidades del mundo de los negocios y de la cultura, encabezadas por Ozawa, con la intención anunciada de renegociar las bases de la relación entre los dos países. El contraste entre la cálida acogida que se dio en Pekín a aquella delegación y el trato insultante y despectivo a Hatoyama por parte de Washington dio lugar a una extendida especulación en los medios de comunicación de Tokio sobre un realineamiento fundamental en la política exterior japonesa, así como a espasmos de histeria en el *establishment* de la política exterior estadounidense. La caída de Hatoyama tuvo lugar poco después, seguida del comienzo de la disputa sobre los islotes.

Muchos japoneses, conservadores o no, temen las intenciones de Pekín. La mayoría no apoya la agenda derechista de Abe, pero el drástico deterioro de las relaciones con Pekín desde la dimisión de Hatoyama les ha venido muy bien a aquellos que defienden que no hay alternativa a los planes del actual primer ministro, si de lo que se trata es de que Japón no sea engullido por una China emergente; y esta es la razón por la que la mayoría votó sin entusiasmo al PLD o bien se quedó en su casa. Ciertamente no hay, a día de hoy, una oposición creíble a la que pudieran unirse. Entre otras cosas, tan solo la estructura de poder existente en Tokio es vista como capaz de asegurar la continuidad del apoyo estadounidense, que la mayoría de los japoneses considera que es su única esperanza de contrarrestar a China. Pero la situación tiene los ingredientes de la tragedia, porque hace al Estado de seguridad nacional estadounidense rehén de la derecha japonesa, y viceversa. Determinados elementos de la derecha japonesa, que abiertamente claman por algún tipo de demostración contra China, avivaron las llamas en la disputa por los islotes. Esas voces puede que de momento estén silenciadas, pero la imposibilidad de conciliar los mitos fundacionales de la derecha con las precondiciones necesarias para las relaciones pacíficas con China

aumenta el potencial para el error de cálculo. Pekín, por su parte, es concebible que busque provocar una crisis que sea lo suficientemente severa como para humillar y avergonzar a Tokio, pero no tanto como para involucrar al ejército estadounidense. De esta forma, mostraría a Japón que la garantía de seguridad estadounidense es en último término poco fiable y le obligaría a una reestructuración de las relaciones chino-japonesas según los términos dictados por Pekín⁵.

La alternativa sería un gobierno japonés que disfrutara de toda la legitimidad que emana del apoyo popular mayoritario, un gobierno que pudiera negociar tanto con Washington como con Pekín como entidad soberana independiente. Solo cuando Japón consiga esto, China lo tomará en serio. Incluso desde la óptica estadounidense, un aliado que se responsabilice de su propia seguridad y de sus relaciones exteriores, en lugar de un huraño protectorado gobernado por revanchistas retrógrados, será mucho menos proclive a cometer la garrafal torpeza de meterse en una confrontación que pudiera forzar a Estados Unidos a intervenir, para no quedar como el tigre de papel del proverbio. De momento, no hay un aliado así a la vista, pues el tipo de escenario capaz de propiciar la condición para hacerlo posible –un gobierno japonés completamente legítimo con un amplio respaldo popular– es hoy por hoy inimaginable. Por el bien de Japón y por el del resto del mundo, uno solo puede esperar que la próxima vez que se dé la oportunidad esta no se sofoque, sino que se aproveche.

⁵ Véase, por ejemplo, Howard French, «China's dangerous game», *The Atlantic*, noviembre de 2014.

NEW LEFT REVIEW

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

Tarifas de suscripción a la revista *New Left Review* en español

Para España

Suscripción anual (6 números)

Suscripción anual individual [55 €]

Suscripción anual para Instituciones [200 €]

*(una suscripción equivaldrá a 3 ejemplares de cada número
enviados a una misma dirección postal)*

Venta de un ejemplar individual para instituciones [20 €]

Gastos de envío postal ordinario incluidos.

Para Europa

Suscripción anual (6 números)

Suscripción anual individual [85 €]

Suscripción anual para Instituciones [300 €]

*(una suscripción equivaldrá a 3 ejemplares de cada número enviados a
una misma dirección postal)*

Venta de un ejemplar individual para instituciones [30 €]

Gastos de envío postal ordinario incluidos.

Resto del mundo*

Suscripción anual (6 números)

Suscripción anual individual [120 €]

Suscripción anual para Instituciones [350 €]

*(una suscripción equivaldrá a 3 ejemplares de cada número enviados a
una misma dirección postal)*

Venta de un ejemplar individual para instituciones [50 €]

Gastos de envío postal ordinario incluidos.

* Excepto en la República del Ecuador. Para dicho país deben contactar con el Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN (<http://iaen.edu.ec>)

Formas de pago

Se puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o domiciliación bancaria a través de nuestra página:

<http://traficantes.net/nlr/suscripcion>

Para cualquier duda podéis escribirnos a nlr_suscripciones@traficantes.net